

BOLETÍN DE ECONOMÍA

UNIDAD DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

Vol. II, Núm. 1

julio-septiembre 1996

Temas de investigación socioeconómica: primera parte

Jaime Bofill Valdés
editor

Se inicia el segundo año del Boletín de Economía con dos números dedicados al tema de la investigación socioeconómica. La importancia de la investigación en el proceso de desarrollo es ampliamente reconocida, aunque no tanto en los países menos desarrollados en términos de producción y otros indicadores macroeconómicos. En estos dos primeros números del Boletín (julio-septiembre y octubre-diciembre de 1996), se presentan, principalmente, resúmenes de tesis doctorales y de maestría en economía. Nuestro objetivo es continuar colaborando con la diseminación de este tipo de investigaciones.

En este número se presentan los trabajos de los profesores Gerardo González, Olben Delgado, Orlando Sotomayor y Edgardo Rodríguez. El trabajo del Profesor González, Profesor de economía de la Universidad Interamericana, es un compendio de un trabajo más extenso sobre el Caribe que la Unidad de Investigaciones Económicas le publicará próximamente. En esta investigación se delinear los cambios económicos que se están gestando a nivel mundial y sus efectos en la región caribeña, principalmente, los cambios relacionados con la reestructuración del comercio internacional y sus efectos en las áreas de las relaciones comerciales, la tecnología y el financiamiento externo. Finaliza su trabajo con un comentario sobre la respuesta caribeña.

El descenso de la tasa de crecimiento de Puerto Rico y el aumento en la tendencia secular de la tasa de desempleo durante las últimas dos décadas, han levantado serias dudas sobre la eficacia del programa de la Administración de Fomento Económico para atraer nueva inversión y crear empleos en Puerto Rico. A la luz de estas tendencias, el Prof. Olben Delgado, Profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, evalúa la eficiencia del Programa de Fomento Económico en Puerto Rico durante el período de 1942-93. Esta tesis doctoral de la Escuela de Educación, Universidad de Nueva York, analiza el desarrollo económico de Puerto Rico para el período de 1942-93 desde la perspectiva metodológica de las

En este número:

Temas de investigación socioeconómica: primera parte	1
El Caribe frente a los cambios mundiales	3
A Historical Analysis of the Economic Development Administration: Inception, Structure, Programs, and Contributions to the Economic Development of Puerto Rico, 1942-1993	6
Poverty and Income Inequality in Puerto Rico 1970-1990: A Decomposition Analysis	13
Los costos sociales de los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional: El caso de México	16
Tesis de maestría en economía desde 1990 a 1996, Escuela Graduada de Economía, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras	21
Índices de números pasados	23

etapas de Rostow, el enfoque de la acumulación de capital y la visión institucionalista. La aplicación del enfoque de Rostow, aunque polémico, no resta mérito a su interesante trabajo investigativo. Su cómputo del IDI (Índice de Desarrollo Humano) para Puerto Rico, con miras a cuantificar el desarrollo de los recursos humanos para el período de 1960-90 y poder efectuar una comparación internacional, es una importante contribución. El índice (desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD) propone una medición del bienestar que combina el poder adquisitivo de la población (ingreso), la expectativa de vida (salud) y la alfabetización (educación). La ordenación del nivel de progreso de los países, usando el PNB per cápita, cambia drásticamente al utilizar el Índice de Desarrollo Humano.

El Profesor Sotomayor del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, desarrolla el tema de la desigualdad económica y la pobreza en Puerto Rico en su tesis doctoral de la Universidad de Cornell. Sus interesantes conclusiones sobre los niveles de pobreza y la distribución del ingreso en Puerto Rico durante el período de 1960-90, además del enfoque metodológico que desarrolla, hacen de esta tesis doctoral una lectura obligada para todos aquellos interesados en estos temas.

El caso de México ha sido noticia de primera plana durante estos últimos años. Su entrada al TLC (Tratado de Libre Comercio), el aparente desplome del modelo mexicano y la intervención del Fondo Monetario Internacional con sus programas de ajuste estructural han mantenido el interés en este país. El Profesor Edgardo Rodríguez de la Universidad Católica de Ponce, se interesa por la otra cara de la moneda del caso mexicano: los costos sociales del programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacioanal. En este estudio (tesis de maestría en economía, Universidad de Puerto Rico) investiga el efecto de los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional en diversas variables que describen la situación económica social de la población de México: los salarios, el desempleo, el gasto social en educación y salud y la pobreza, entre otras.

Finalmente, Gustavo Vélez, Asistente de Investigación de la Unidad de Investigaciones Económicas de la Universidad de Puerto Rico, ha preparado una lista de las tesis de maestría de la Escuela Graduada de Economía, Universidad de Puerto Rico, desde 1990 a 1996.

En el próximo número del Boletín (octubre-diciembre 1996) se incluyen investigaciones socioeconómicas de los profesores José Alameda (Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayagüez), Julio Quintana (UPR, Mayagüez), Luis Rafael Rodríguez (UPR, Humacao), y de la investigadora Elvia Pérez (Departamento de Comercio Federal). Además, Gustavo Vélez, (UPR, Unidad de Investigaciones Económicas, Río Piedras) ha preparado un resumen de las tesis de maestría en economía para los años académicos 1995 y 1996 de la Escuela Graduada de Economía, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

El Caribe frente a los cambios mundiales

*Gerardo González Núñez**

Los países del Caribe enfrentan poderosos desafíos quizás mucho mayores que los que hayan enfrentado en otras épocas al tener que lidiar con un sistema económico internacional que tiende a la liberalización comercial y a reconocer nuevas formas de competencia a través de la innovación tecnológica. Su mayor reto está en revertir o al menos frenar su progresiva marginalización de la economía mundial. Esto significa que, en correspondencia con el papel que se le ha atribuido en la división internacional del trabajo, su inserción actual no la ubica en el centro de las principales tendencias productivas, comerciales, tecnológicas y financieras. Los cambios que se están dando a escala mundial tienen un impacto específico en la región.

Relaciones comerciales

Hablar del futuro de la inserción del Caribe en la economía mundial implica referirse en primera instancia a las perspectivas de su posición con respecto a uno de sus principales mercados: los Estados Unidos.

Diversos analistas coinciden con líderes políticos y empresarios caribeños en señalar que el Tratado de Libre Comercio (NAFTA, por sus siglas en inglés) entre los Estados Unidos, Canadá y México, resultará atentatorio para el futuro económico de la región ante la posibilidad de erosión y pérdidas de los accesos preferenciales existentes actualmente en términos de comercio. Se señala que el mismo pudiera anular las ventajas de acceso preferencial de las exportaciones caribeñas a los Estados Unidos bajo la iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), el Sistema Generalizado de Preferencias y otras disposiciones concesionales al aumentar las ventajas relativas de México en un grupo de productos que son los mismos que constituyen el mayor potencial exportador del Caribe, como manufacturas de uso intensivo de mano de obra (textiles, confecciones y otros), productos agrícolas y agroindustriales. Esto proveerá a México de una ventaja adicional en la

atracción de inversiones. En líneas generales, se percibe el gran peligro de la marginalización del Caribe de su principal mercado por la desigual competencia que se establecerá con México.

Es comprensible entonces que la posición predominante de los países del Caribe frente al NAFTA y en general frente a las nuevas tendencias económicas mundiales sea la de favorecer la presentación de los acuerdos preferenciales tipo ICC e incluso la de su extensión a aquellos productos que actualmente están excluidos de la Iniciativa. Mantener ese status les evitaría enfrentarse a la realidad de su incapacidad para competir en un mercado libre sin protección preferencial. También eliminaría la posibilidad de tener que otorgarle a los Estados Unidos, bajo el principio de la reciprocidad, un tratamiento de libre acceso a sus productos. ¿Cuál es la reacción que podría esperarse de los Estados Unidos ante los reclamos caribeños?

Los programas económicos preferenciales que los Estados Unidos han brindado al Caribe han estado vinculados a los intereses geopolíticos de la región. Históricamente los Estados Unidos han considerado al Caribe como parte de su sistema de seguridad por lo que la región ha sido en mayor o menor medida foco de interés y preocupación de las sucesivas administraciones norteamericanas. El interés y preocupación norteamericanos por la región se incrementaron con el triunfo de la Revolución Cubana al introducir en su percepción la noción de que el conflicto Este-Oeste se reprodujo en sus fronteras al emerger un país que actuaba como "satélite" de la Unión Soviética. De ahí que la intención de los Estados Unidos en promover el comercio y la inversión de la región, constituyó un importante componente en su estrategia por evitar la "expansión del comunismo" en el continente.

Una de las principales consecuencias para el Caribe del fin de la Guerra Fría y de la globalización de la economía mundial es la pérdida de su status de región priorizada en la política exterior norteamericana, que bajo la nueva configuración internacional ha colocado como su eje central la búsqueda de alternativas para la reafirmación de su hegemonía económica a nivel mundial frente a sus eternos rivales: Japón y la

Unión Europea. El lanzamiento de la Iniciativa para las Américas y el NAFTA se inscriben en el conjunto de acciones diseñadas en función de los nuevos intereses geoeconómicos norteamericanos, en los que aparentemente el Caribe está llamado a jugar un papel secundario.

El rediseño de las prioridades norteamericanas en su proyección exterior se produjo en un momento en que el Caribe esperaba de su mercado tradicional mucho más que expectativas en términos de comercio, inversión y ayuda financiera, en medio de crecientes preocupaciones por la evolución del sistema económico internacional y su incidencia en el desarrollo económico de la región.

Los Estados Unidos se han replanteado las relaciones económicas con el Caribe bajo los mismos términos que para el resto del hemisferio. Si existe alguna política norteamericana para la región caribeña es precisamente la oferta que sustenta la Iniciativa para las Américas: un acuerdo de libre comercio. Tal y como plantean las exigencias norteamericanas, este acuerdo deberá ser negociado y para ser elegible los países interesados deberán cumplir los siguientes criterios: comprometerse a implantar políticas de orientación de mercado y que garanticen un régimen económico estable, eliminar todas las barreras que impiden el libre comercio y aplicar la reciprocidad.

Todo parece indicar que el proceso de integración de las economías caribeñas a la norteamericana transitará bajo otras coordenadas; ya no sólo dependerá de las intenciones de los Estados Unidos, sino también de la capacidad caribeña para garantizarlo.

El problema tecnológico

El desarrollo de nuevas tecnologías en diversos campos podría implicar múltiples consecuencias para las sociedades caribeñas, siendo una de ellas la conocida desvalorización de los productos primarios de exportación. El surgimiento de diversos productos sustitutivos ha provocado una disminución de la demanda de aquellos que han sido durante años las principales fuentes de ingreso y

empleo para las sociedades caribeñas como el azúcar y la bauxita.

Por otra parte, el desarrollo tecnológico actual apunta hacia ampliar la brecha existente entre el mundo desarrollado y la región al disminuir las posibilidades de adquisición de las nuevas tecnologías. Estas son, en general, incompatibles con las características económico-geográficas de sus territorios y a su vez resultan muy costosas en un momento en que se vislumbra una disminución de los flujos financieros.

En otro orden, el desarrollo de las nuevas tecnologías y su aplicación en los procesos productivos incrementan la importancia del recurso humano altamente calificado, lo cual tendería a aumentar la demanda de este tipo de fuerza de trabajo en los mercados laborales de los países centrales. Presumiblemente, esto podría implicar una restricción de los flujos de inmigrantes hacia dichos mercados al hacerlo más selectivos, lo cual afectaría la tradicional válvula de escape de las sociedades caribeñas.

Financiamiento externo

Los países caribeños, al igual que el resto de América Latina, han sufrido una contracción de los flujos financieros derivado de las tendencias globales que se delinearón a partir de la crisis de la deuda. Pero sobre ellos opera un factor agravante.

Como resultado de sus relativos altos ingresos per cápita, muchos países de la región enfrentan el peligro de no constituir prioridad para los préstamos de los organismos financieros internacionales. Desde que el Banco Mundial, por ejemplo, opera con un criterio de \$2,850 per cápita, como cifra máxima para otorgar financiamiento, algunos países como Trinidad y Tobago y Barbados no reciben la prioridad deseada en la distribución de recursos de esa institución. También, el Banco Mundial ha utilizado como argumento que la solución de las necesidades básicas en esos países ha sido mayor en relación con otros miembros de la institución.

En el plano bilateral, el Caribe ha confrontado también una disminución de la asistencia económica norteamericana. Por una combinación de factores de políticas domésticas y de nuevas prioridades en política externa, los Estados Unidos han ido recortando desde 1985 el apoyo financiero a las economías de la región. Por ejemplo, en los primeros años de operación de la ICC (entre 1985 y 1989) dicho recorte significó una pérdida para el área de 188 millones de dólares.

La respuesta caribeña

La magnitud de las implicaciones que traerán para la región los cambios que se están produciendo en el sistema internacional dependerá, en gran medida, de la propia evolución de los mismos. Pero también, de la respuesta que generen los países para enfrentarlos, reteniendo la premisa de que si se quiere lograr una inserción más equilibrada en la economía mundial, las políticas y decisiones que se adopten en el área deberán tener en cuenta las reglas de juego que están imponiendo las nuevas circunstancias. El problema que se plantea es cómo diseñar una alternativa que se ajuste a las exigencias externas sin que ello derive en costos sociales y políticos de tal envergadura, que se deslegitime entre los miembros de las respectivas sociedades.

Hay consenso en la región en reconocer la necesidad de una reestructuración de las economías caribeñas que resulte en una mayor competitividad de sus estructuras productivas. La polémica se produce cuando se intenta establecer el derrotero que debe seguir la reestructuración, sobre todo porque en la misma se levantan variados dilemas: inserción externa versus intereses nacionales; sustitución de importaciones versus diversificación de las exportaciones; apertura externa versus proteccionismo nacional.

Bibliografía

Diana-Deere, Carmen ed., (1990) **In the shadows of the sun. Caribbean development alternatives and U.S. policies**, PACCA, Westviwew Press.

Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC (1992) **The Caribbean and the North American Free Trade Agreement (NAFTA)**, 14th Session of CDCC, Grenada. December.

International Monetary Fund (1991) **International Financial Statistic Yearbook**, Washington, D.C.

Lewis, David (1993) **Los acuerdos regionales de libre comercio y el Caribe: retos y oportunidades del Tratado de Libre Comercio Norteamericano**. Ponencia presentada en el Taller-Seminario "El Caribe y Cuba en la postguerra fría", Caracas. Venezuela, 20-22 de mayo.

Pantojas-García, Emilio (1993) **Free Trade and U.S.-Caribbean Basin relations: The Specter of the North Ameican Free Trade Agreement**. Cuaderno de Trabajo No. 1, Universidad de Puerto Rico, mayo.

U.S. Department of Commerce (1991) **Guidebook Caribbean Basin Initiative**, Washington, D.C.

**Profesor de economía, Universidad Interamericana, Recinto Metro. Resumen de un trabajo más extenso a publicarse bajo el mismo título por la Unidad de Investigaciones Económicas.*

A Historical Analysis of the Economic Development Administration: Inception, Structure, Programs, and Contributions to the Economic Development of Puerto Rico, 1942-1993

*Olben Delgado Mendez**

During the 500 years since its discovery in 1493, the Island of Puerto Rico has been under the stewardship of the Spanish government, from 1493 to 1898, and of the American government, from 1898 to the present. Under these stewardships, relative self government was given to the Island by each country. During the Spanish stewardship, some self governing powers were provided by the Autonomic Act of 1897 and during the American regime, these powers were conceded by the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico in 1952. Within the framework of this political scheme the economic development of the Island evolved from an mono-agriculturally, underdeveloped economy to a highly developed industrialized economy.

Under the Spanish stewardship, economic progress was based primarily on the development of the agricultural sector and the internationalization of agricultural commerce, in conjunction with the development of social, economic, and political institutions that made this progress viable. However, at the end of the Spanish regime, the Island of Puerto Rico still remained an underdeveloped country characterized by poor educational and health conditions and a low standard of living.

Under the first four decades of the American stewardship; that is, between 1898 and 1940, the Island experienced little significant economic or social progress. Despite the paucity of economic progress during these four decades, the development of political and economic conditions to foster economic progress in the following decades, however, became significant. The implementation of the Foraker Act of 1900, which provided a civil government to the Island and defined the political and economic conditions that defined the relationship between the United States and Puerto Rico, and the Jones Act of 1917, which clarified the organization of the government of Puerto Rico under the Foraker Act, provided the political and economic

framework upon which economic, political, and social development took place in subsequent years.

It was not until the decade of 1940 when a new political administration under the leadership of Luis Muñoz Marín, and a new American governor, Rexford G. Tugwell, appointed by the President of the United States, that a deliberate and decisive attempt was made to promote the economic development of the Island. As a first step a broad program of social and economic reforms was undertaken, with the aim of directly promoting agricultural and industrial development. To implement these reforms several governmental institutions were created, such as the Electricity Authority, the Land Authority, the Government Development Bank, the Planning Board, and the Puerto Rico Development Company. This latter Company established in 1942, renamed the Puerto Rico Industrial Company (PRIDCO) in 1947, was directly charged with coordinating and fostering economic development of the Island. Its main focus was to provide incentives for the stimulation of new private investments, the generation of public investment, and the promotion of import substitution in areas critical to economic activity of the Island, such as the production of cement, shoes, cartons, clay products, and glass containers for the rum industry. In addition, import substitution was conceived as a way to supply such items in short supply in the local economy due to the effects of the World War II.

The limited success in promoting investment, employment, and income faced by PRIDCO forced the government of the Island to refocus its developmental policy from direct intervention --public investment-- in economic activity to the promotion of private investment. The new policy, called Operation Bootstrap, was initiated in 1947 with the enactment of Act No. 346, which provided tax exemption on corporate income, property, and municipal taxes of new industries for a ten-year period. Apart from this Act, the new policy also focused on benefits such as federal tax exemptions and free access to United States markets for the exportation of final products and the acquisition of raw materials. This new policy was complemented with an administrative support program, which included the development of physical infrastructure, the construction of buildings for lease or selling to new firms, the training of

employees and administrators, and the promotion of local products in the United States. This policy was reinforced with the creation of the Economic Development Administration (EDA) in 1950, charged with the promotional aspects of the economic development program, and the attachment of PRIDCO as a subsidiary of EDA with the responsibility of developing the physical infrastructure needed by new firms.

During the decades of 1950, 1960, and 1970 the economic development program implemented by EDA was successful in attracting new industries mainly from the United States, which provided a positive impact on the rate of investment, employment, and income. Economic progress became evident as income per capita increased, as well as improvements in education and health. However, during the 1980's and the first three years of the 1990s, the rate of growth slowed as evidenced by the reduction in real GDP per capita. During the decades of 1950, 1960, and 1970, average real GDP increased at an annual rate of 5.5, 7.3, and 5.8 percent, respectively, but thereafter, declined to an average of 3.1 percent. This situation raised questions as to the effectivity and extent of EDA and its programs in the promotion and achievement of the economic development of the Island. These questions and the lack of adequate answers gave rise to this study in which an attempt was made to trace the origins of the Economic Development Administration, examine and analyze the changes in its structure and the development of its programs, so as to determine to what extent this agency contributed to the economic development of Puerto Rico during the period 1942 to 1993.

In the pursuit of this aim, the historical method was used to obtain, organize, analyze, evaluate, and derive inferences from the various data acquired. The three major operations of the historical method were followed: heuristic, the search for material or sources of information on which to work; criticism, appraisal of the material or sources from the viewpoint of evidential value; and synthesis, the assembling of a body of historical data and their presentation in terms of objective truth and significance.

More specifically, the quantitative data were analyzed in three categories: the construction of a time series for selected variables to verify the

relationship between EDA's contributions and selected principal variables, such as investment, income, and employment; the assessment of the impact of these variables on economic activity through the multiplier effect; and the construction of a Human Development Index for Puerto Rico to measure human development from 1960 to 1990. In the collection of qualitative data, special attention was given to selected events, individuals, institutions, and forces that had occurred and which contributed to shape the present socioeconomic conditions of the Island. In particular, personal interviews were conducted with those people who were directly involved with the activities of EDA during their respective tenures. These interviews were used primarily to confirm existing data, particularly in those areas where interviewees provided pertinent primary information. Finally, the body of historical data was organized and evaluated in light of Rostow's stages approach, the capital accumulation approach, and the institutional approach of economic development. These approaches were organized into an economic development model, which has served as the analytical tool of this study.

This model states that, according to W.W. Rostow's approach, the process of economic development can be explained through a series of five successive stages. The first of those stages is the traditional society characterized by low productivity and rudimentary means of production. The traditional stage is followed by the second stage in which the creation of the preconditions for a more advanced stage of development (known as the take-off stage) are settled. The preconditions stage is characterized by endogenous factors such as the creation of political structures or by exogenous factors such as external contact with more technologically advanced societies.

In the third stage--the take-off--those factors that impede development (bottlenecks), such as the lack of infrastructure or skilled labor, are eliminated. Savings and investment rise from an average of five to ten percent of national income, facilitating the incorporation of new technologies in industry and agriculture. The emergence of political power that assign a high priority to economic development is also a characteristic of this stage. According to the model structured for this study it is in the take-off stage that capital investment becomes

crucial in the development process, in line with the capital accumulation approach. This approach states that to grow, an economy must save a proportion of its national income to incorporate new investment and technologies into the capital stock. Increases in national production are associated with increases in national savings ratio and with decreases in the national capital-output ratio. However, if an economy can not generate sufficient savings to facilitate the incorporation of new investment and encourage technical progress, that country could fill the savings gap either through foreign aid or the attraction of private foreign investment. In the present model emphasis is given to the attraction of foreign investment through the development of governmental organizations which are of vital importance in the planning, coordination, and promotion of economic development, as stated by the institutional approach. Governmental organizations such as PRIDCO and EDA are important elements in the elimination of bottlenecks and the induction of the take-off for economic development.

The take-off is succeeded by the drive to maturity stage characterized by a steady increase of investment from about 10 percent to 20 percent of national income, the development of new import requirements as well as new export commodities, which contribute to promote the internationalization of the economy. Finally, the last stage--high mass consumption stage--is characterized by mass production and heavy consumption, especially in durable goods and services.

On the basis of the analysis and evaluation of the data, the following conclusions were derived.

1. The economic history of Puerto Rico can be explained using the stages of economic growth as conceived by Rostow. The period under the Spanish stewardship (1493 to 1898), represents the traditional society, or the first stage in the economic development of Puerto Rico. This stage was followed by the first four decades of the American stewardship (1898-1940) in which important political and economic conditions took place, creating the preconditions for the economic take-off of the Island. The decades of 1940 and 1950 comprise the period of economic take off characterized by the establishment of the necessary institutional and administrative settings needed to

foster capital investment and to promote economic development. The decades of 1960 and 1970 represent the fourth stage or the drive to maturity stage in which economic development accelerated, as evidenced by the high growth rates in real GDP. The final stage, high mass consumption, particularly of durable goods, came during the 1980's when high levels of real consumption expenditures per capita were observed.

2. The poor socioeconomic conditions prevailing at the inception of the 1940 decade, the favorable political conditions created by the appointment of a new American governor, and the advent of a new political administration, created the appropriate environment for socioeconomic reform directed to attain specific social and economic goals. As called for by the institutional approach, the creation of PRIDCO and later EDA,--the two main economic development institutions created to coordinate and attain these economic goals--was vital in the promotion of the takeoff environment necessary for economic development. These institutions were crucial in the implementation of the economic development policy of the Island creating the mechanisms needed to achieve the desired economic goals.

3. The lack of local private and public savings due to the low income level of the Island during the 1940's, forced the government of Puerto Rico to attract foreign private investment. In line with the capital accumulation approach and through the promotional programs of PRIDCO and EDA, in order to bridge the savings gap, promote capital investment, and increase national production foreign investment was necessary. The promotional efforts undertaken by the government at the end of the 1940's and thereafter succeeded in attracting capital investment from abroad, particularly from the United States. This accelerated capital investment resulted in the increase of economic growth, as stated by the capital accumulation approach.

4. The structure of the organizations in charge of coordinating and promoting economic development has evolved over time in response to changes in economic policy, aimed to adapt to changes in the structural demand of the market and, at the same time attain the main objectives of investment, promotion, employment creation, and income generation. With the transfer of PRIDCO to

EDA, and thereafter, this organization evolved toward a more complex administrative structure, composed of three main divisions: the Local Branch, the Continental Branch, and PRIDCO. Within the Local Branch, an administrative unit was established specifically to foster economic development from endogenous sources. EDA has made significant contributions in the promotion of local firms, to the extent that their percentage share in manufacturing increased from 18.2 percent in 1961 to 52.1 percent in 1993. This contribution seems to violate the local belief which has prevailed for some time that EDA has failed in promoting economic development from within local sources.

5. The Economic Development Administration has made significant contributions to the economic activity in the manufacturing sector and to the economy as a whole, although these contributions have been less dramatic during the past two decades.

6. Even though EDA made significant contributions to the economy of Puerto Rico since 1950, economic development policy, as well as the structure and programs created to implement this policy, centered on the development of the industrial sector, at the expense of the other sectors of the economy. Because of this the Puerto Rico Tax Incentives Act was amended in 1987 to provide tax incentives to the service sector, but the amendment was limited to industries providing services to foreign markets, such as investment banking, commercial distribution, and public relations. This situation made the economy of the Island highly dependent on the manufacturing sector, which at the same time depended mainly on factors outside the control of the government of Puerto Rico, such as the 936 section.

7. Political conditions of Puerto Rico under the Spanish stewardship, as well as under American stewardship, have greatly influenced economic development of the Island, providing the legal and political context within which economic development has taken place. The political development of the Island has been directed to the acquisition of more sovereign and self-governing powers. The enactment of the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico in 1952, was viewed by the local government, the American government, and the United Nations as the attainment of a self-

governing or non-colonial status. However, this view has been modified and there exists a consensus within the three main political parties of the Island, as well as among the majority of the people of Puerto Rico, that the Commonwealth status lacks the fundamental powers of a sovereign state.

8. Social conditions of the Island, particularly educational attainment and health care, slowly improved under the Spanish stewardship, as well as under the first four decades of the American control. However, it was not until the 1940 decade that an accelerated improvement in social conditions was realized mainly by the increased economic growth promoted by EDA. This economic growth translated into improvements in education, income, and health care, placing the Island as one of the highest economically and socially developed entities among 173 countries of the world. Using the Absolute Human Development Index to measure the levels of economic and social development, the Island ranked 25 in 1990. Using the Relative HDI, it is found that the Island evidenced progress in HDI during the period 1960 to 1980. However this progress slowed during the period 1980-1990, as EDA contributions slowed deteriorating the relative position of the Island among the other 114 countries, as shown in Table 1.

9. The development of an educational system in the Island has been instrumental in improving educational attainment, which at the same time is crucial to induce technological and economic progress. Notwithstanding the improvements in educational attainment, the public educational system has not responded in the short run to the need for skilled workers in jobs such as taxi drivers, tour operators, and hotel management and services. The demand for these occupations has been supplied through EDA's Human Resources Development Division. It can be inferred that the public education curricula in the vocational areas at the intermediate, high school, and university levels have not been revised periodically, according to the demands for skilled employees in these occupations.

**Professor of Economics, University of Puerto Rico, Mayagüez Campus. Summary of Ph.D. dissertation, School of Education, New York University.*

Table 1
Relative Human Development Index for Puerto Rico and other 114 countries, 1960-1990

1960			1970			1980			1990		
HDI 1960	HDI Rank	Country	HDI 1970	HDI Rank	Country	HDI 1980	HDI Rank	Country	HDI 1990	HDI Rank	Country
High	Human	Development	High	Human	Development	High	Human	Development	High	Human	Development
0.867	1	Sweden	0.887	1	Canada	0.911	1	Canada	0.929	1	Canada
0.865	2	Canada	0.881	2	Sweden	0.906	2	Japan	0.928	2	Japan
0.865	3	USA	0.881	3	USA	0.905	3	USA	0.926	3	USA
0.865	4	Norway	0.879	4	Denmark	0.901	4	Norway	0.925	4	Norway
0.857	5	U. Kingdom	0.878	5	Norway	0.899	5	Sweden	0.925	5	Switzerland
0.857	6	Denmark	0.875	6	Japan	0.897	6	Switzerland	0.924	6	Sweden
0.855	7	Netherlands	0.873	7	U.Kingdom	0.895	7	France	0.922	7	France
0.853	8	Switzerland	0.872	8	Switzerland	0.892	8	U.Kingdom	0.921	8	Australia
0.853	9	France	0.871	9	France	0.890	9	Australia	0.918	9	Netherlands
0.853	10	Iceland	0.867	10	Netherlands	0.890	10	Iceland	0.917	10	U.Kingdom
0.852	11	New Zealand	0.863	11	Iceland	0.888	11	Denmark	0.912	11	Germany
0.850	12	Australia	0.862	12	Australia	0.888	12	Netherlands	0.910	12	Denmark
0.841	13	Germany	0.861	13	New Zealand	0.881	13	Germany	0.910	13	Iceland
0.826	14	Luxembourg	0.857	14	Austria	0.880	14	Finland	0.909	14	Finland
0.826	15	Belgium	0.856	15	Germany	0.880	15	Austria	0.909	15	Austria
0.811	16	Finland	0.855	16	Finland	0.877	16	New Zealand	0.908	16	Belgium
Medium	Human	Development	0.851	17	Belgium	0.873	17	Belgium	0.904	17	New Zealand
0.797	17	Austria	0.843	18	Luxembourg	0.869	18	Luxembourg	0.902	18	Luxembourg
0.755	18	Italy	0.831	19	Italy	0.862	19	Israel	0.895	19	Israel
0.737	19	Uruguay	0.829	20	Ireland	0.862	20	Ireland	0.888	20	Barbados
0.737	20	Trinidad & To	0.827	21	Israel	0.857	21	Italy	0.887	21	Ireland
0.719	21	Israel	0.824	22	Barbados	0.856	22	Barbados	0.884	22	Spain
0.710	22	Ireland	0.820	23	Spain	0.855	23	Puerto Rico	0.883	23	Italy
0.686	23	Japan	0.808	24	Puerto Rico	0.851	24	Spain	0.871	24	Hong Kong
0.678	24	Barbados	Medium	Human	Development	0.844	25	Cyprus	0.869	25	Puerto Rico
0.667	25	Argentina	0.789	25	Trinidad & To	0.839	26	Greece	0.865	26	Greece
0.636	26	Spain	0.762	26	Uruguay	0.838	27	Hungary	0.862	27	Hungary
0.632	27	Puerto Rico	0.748	27	Argentina	0.830	28	Uruguay	0.855	28	Cyprus
0.625	28	Hungary	0.737	28	Hong Kong	0.830	29	Hong Kong	0.854	29	Uruguay
0.600	29	Venezuela	0.728	29	Cyprus	0.816	30	Trinidad &	0.853	30	Trinidad & To
0.584	30	Chile	0.723	30	Venezuela	0.802	31	Malta	0.838	31	Chile
0.579	31	Cyprus	0.705	31	Greece	Medium	Human	Development	0.831	32	Malta
0.573	32	Greece	0.682	32	Hungary	0.790	32	Argentina	0.830	33	Portugal
0.561	33	Hong Kong	0.682	33	Singapore	0.784	33	Venezuela	0.827	34	Singapore
0.550	34	Costa Rica	0.662	34	Chile	0.780	34	Singapore	0.813	35	Venezuela
0.529	35	Jamaica	0.647	35	Jamaica	0.758	35	Mexico	0.805	36	Costa Rica
0.519	36	Singapore	0.642	36	Costa Rica	0.753	36	Chile	Medium	Human	Development
0.517	37	Mexico	0.615	37	Mexico	0.746	37	Costa Rica	0.798	37	Mexico
0.517	38	Malta	0.615	38	Malta	0.736	38	Portugal	0.795	38	Argentina

Table 1
Relative Human Development Index for Puerto Rico and other 114 countries, 1960-1990

1960			1970			1980			1990		
HDI 1960	HDI Rank	Country	HDI 1970	HDI Rank	Country	HDI 1980	HDI Rank	Country	HDI 1990	HDI Rank	Country
0.515	39	Uni. Ar. Ermi.	0.601	39	Uni. Ar. Ermi.	0.719	39	Uni. Ar. Ermi.	0.789	39	Mauritius
Low	Human	Development	0.592	40	Panama	0.687	40	Malaysia	0.784	40	Malaysia
0.486	40	Mauritius	0.591	41	South Africa	0.687	41	Panama	0.748	41	Colombia
0.485	41	Panama	0.588	42	Portugal	0.673	42	Brazil	0.743	42	Uni. Ar. Ermi.
0.475	42	Sri Lanka	0.554	43	Colombia	0.666	43	Korea Rep. of	0.725	43	Brazil
0.474	43	Paraguay	0.528	44	Peru	0.665	44	South Africa	0.714	44	Turkey
0.469	44	Colombia	0.524	45	Mauritius	0.658	45	Syrian Ar.Rep	0.713	45	Saudi Arabia
0.464	45	South Africa	0.523	46	Korea Rep. of	0.656	46	Colombia	0.709	46	Panama
0.460	46	Portugal	0.511	47	Paraguay	0.654	47	Jamaica	0.707	47	Thailand
0.448	47	Saudi Arabia	0.511	48	Saudi Arabia	0.629	48	Saudi Arabia	0.704	48	Jamaica
0.422	48	Ecuador	0.507	49	Brazil	0.626	49	Mauritius	0.696	49	Syrian Ar.Rep
0.420	49	Peru	0.506	50	Sri Lanka	0.613	50	Ecuador	0.688	50	South Africa
0.419	50	Philippines	Low	Human	Development	0.602	51	Paraguay	0.645	51	Ecuador
0.398	51	Korea Rep. of	0.489	51	Philippines	0.590	52	Peru	0.644	52	Sri Lanka
0.394	52	Brazil	0.485	52	Ecuador	0.581	53	Iraq	0.637	53	Paraguay
0.385	53	Dom. Repub.	0.471	53	Malaysia	0.557	54	Philippines	0.623	54	Korea Re.Dem
0.373	54	Thailand	0.465	54	Thailand	0.553	55	Jordan	0.610	55	Tunisia
0.348	55	Iraq	0.462	55	Nicaragua	0.552	56	Sri Lanka	0.607	56	Philippines
0.344	56	Nicaragua	0.455	56	Dom. Repub.	0.551	57	Thailand	0.603	57	Peru
0.339	57	El Salvador	0.452	57	Iraq	0.549	58	Turkey	0.603	58	Iraq
0.333	58	Turkey	0.441	58	Turkey	0.541	59	Dom. Repub.	0.590	59	Dom. Repub.
0.330	59	Malaysia	0.422	59	El Salvador	Low	Human	Development	0.586	60	Jordan
0.318	60	Syrian Ar.Rep	0.419	60	Syrian Ar.Rep	0.499	60	Tunisia	0.582	61	Botswana
0.311	61	Guatemala	0.406	61	Iran Islam.Rep	0.498	61	Gabon	0.574	62	Iran Islam. Rep
0.308	62	Bolivia	0.405	62	Jordan	0.492	62	Nicaragua	0.564	63	China
0.306	63	Iran Islam.Rep	0.392	63	Guatemala	0.477	63	Guatemala	0.561	64	Gabon
0.296	64	Jordan	0.378	64	Gabon	0.477	64	Iran Islam.Rep	0.551	65	Algeria
0.284	65	Zimbabwe	0.372	65	China	0.476	65	Algeria	0.540	66	Indonesia
0.280	66	Honduras	0.369	66	Bolivia	0.475	66	China	0.524	67	El Salvador
0.264	67	Algeria	0.350	67	Honduras	0.454	67	El Salvador	0.519	68	Guatemala
0.259	68	Gabon	0.340	68	Tunisia	0.442	68	Bolivia	0.516	69	Nicaragua
0.258	69	Zambia	0.326	69	Zimbabwe	0.435	69	Honduras	Low	Human	Development
0.258	70	Tunisia	0.325	70	Pap.NewGuin.	0.418	70	Indonesia	0.495	70	Honduras
0.248	71	China	0.323	71	Algeria	0.414	71	Botswana	0.477	71	Lesotho
0.245	72	Lesotho	0.318	72	Myanmar	0.404	72	Lesotho	0.474	72	Morocco
0.243	73	Myanmar	0.315	73	Zambia	0.386	73	Zimbabwe	0.454	73	Bolivia
0.241	74	Congo	0.307	74	Congo	0.383	74	Morocco	0.445	74	Zimbabwe
0.237	75	Madagascar	0.307	75	Lesotho	0.368	75	Congo	0.440	75	Congo
0.233	76	Ghana	0.306	76	Indonesia	0.360	76	Egypt	0.439	76	Egypt
0.223	77	Indonesia	0.291	77	Madagascar	0.356	77	Myanmar	0.429	77	Myanmar

Table 1
Relative Human Development Index for Puerto Rico and other 114 countries, 1960-1990

1960		1970		1980		1990					
HDI 1960	HDI Rank	Country	HDI 1970	HDI Rank	Country	HDI 1980	HDI Rank	Country	HDI 1990	HDI Rank	Country
0.210	78	Egypt	0.284	78	Botswana	0.348	78	Pap.New	0.418	78	Kenya
0.208	79	Pap.New	0.283	79	Ghana	0.344	79	Madagascar	0.391	79	Madagascar
0.207	80	Botswana	0.282	80	Morocco	0.342	80	Zambia	0.390	80	Pap.New Guinea
0.206	81	India	0.269	81	Egypt	0.340	81	Kenya	0.384	81	Cameroon
0.198	82	Morocco	0.254	82	Kenya	0.332	82	Cameroon	0.380	82	Zambia
0.192	83	Kenya	0.254	83	India	0.330	83	Cote d'Ivoire	0.380	83	Pakistan
0.191	84	Cameroon	0.253	84	Cameroon	0.323	84	Ghana	0.379	84	Ghana
0.185	85	Uganda	0.248	85	Mozambique	0.297	85	Nigeria	0.370	85	India
0.185	86	Rwanda	0.244	86	Pakistan	0.296	86	India	0.364	86	Cote d'Ivoire
0.184	87	Nigeria	0.243	87	Cote d'Ivoire	0.295	87	Haiti	0.348	87	Haiti
0.183	88	Pakistan	0.235	88	Zaire	0.287	88	Pakistan	0.344	88	Tanzania U.Rep
0.179	89	Zaire	0.230	89	Nigeria	0.286	89	Zaire	0.338	89	Zaire
0.174	90	Haiti	0.229	90	Liberia	0.282	90	Tanzania	0.334	90	Nigeria
0.169	91	Mozambique	0.218	91	Haiti	0.277	91	Liberia	0.326	91	Yemen
0.168	92	Cote d'Ivoire	0.215	92	Rwanda	0.255	92	Togo	0.307	92	Liberia
0.166	93	Bangladesh	0.213	93	Uganda	0.253	93	Yemen	0.304	93	Togo
0.166	94	Liberia	0.211	94	Tanzania	0.247	94	Mozambique	0.288	94	Senegal
0.162	95	Tanzania	0.199	95	Bangladesh	0.244	95	Rwanda	0.286	95	Uganda
0.160	96	Cent.African	0.196	96	Cent.African	0.234	96	Bangladesh	0.285	96	Bangladesh
0.160	97	Sudan	0.195	97	Angola	0.233	97	Senegal	0.285	97	Rwanda
0.146	98	Senegal	0.188	98	Sudan	0.229	98	Sudan	0.274	98	Malawi
0.144	99	Malawi	0.183	99	Togo	0.226	99	Cent.African	0.271	99	Burundi
0.139	100	Angola	0.176	100	Malawi	0.219	100	Burundi	0.270	100	Nepal
0.131	101	Burundi	0.176	101	Senegal	0.216	101	Malawi	0.266	101	Mozambique
0.130	102	Benin	0.162	102	Benin	0.215	102	Uganda	0.265	102	Cent.African Re
0.128	103	Nepal	0.162	103	Nepal	0.212	103	Angola	0.259	103	Angola
0.123	104	Togo	0.157	104	Burundi	0.209	104	Nepal	0.258	104	Sudan
0.112	105	Chad	0.155	105	Sierra Leone	0.197	105	Benin	0.234	105	Benin
0.111	106	Somalia	0.138	106	Yemen	0.177	106	Sierra Leone	0.222	106	Guinea-Bissau
0.101	107	Afghanistan	0.135	107	Chad	0.165	107	Afghanistan	0.216	107	Gambia
0.095	108	Sierra Leone	0.134	108	Niger	0.163	108	Niger	0.213	108	Somalia
0.092	109	Yemen	0.131	109	Afghanistan	0.162	109	Somalia	0.210	109	Chad
0.091	110	Guinea-Bissau	0.125	110	Guinea-Bissau	0.151	110	Chad	0.208	110	Mali
0.090	111	Niger	0.124	111	Somalia	0.151	111	Burkina Faso	0.206	111	Niger
0.086	112	Burkina Faso	0.116	112	Burkina Faso	0.148	112	Guinea	0.204	112	Sierra Leone
0.083	113	Mali	0.111	113	Guinea	0.148	113	Gambia	0.202	113	Afghanistan
0.083	114	Guinea	0.107	114	Gambia	0.148	114	Guinea-Bissau	0.197	114	Burkina Faso
0.068	115	Gambia	0.102	115	Mali	0.146	115	Mali	0.181	115	Guinea

Source: The HDI for Puerto Rico was calculated by the author. The data for the other 114 countries were obtained from the United Nations (1993). Human Development report

**Poverty and Income Inequality in
Puerto Rico 1970-1990:
A Decomposition Analysis**

*Orlando J. Sotomayor Rodríguez**

Inequality and poverty index decomposition analysis is used as a general framework for obtaining a better understanding of the factors behind the high levels of poverty and income inequality evident in Puerto Rico. The same methodology is utilized for ascertaining the source of the changes in poverty and inequality through the decades of the 1970s and 1980s. A concluding section examines the actual experience and potential of worker self-management as a remedy against both problems.

A discussion of issues in the measurement of poverty makes evident the ambiguities involved in the selection of poverty thresholds and indices. That is, particularly when dealing with indices, not one but a whole set of these can be considered acceptable. Which particular one is considered most useful depends on one's view about what should be measured, how, and what exactly constitutes a change in the poverty condition. To restrict the choice of acceptable measures, indices used in the dissertation were required to respect a set of simple and important properties. Briefly, the measures were required to focus exclusively on the condition of the poor, to be sensitive to changes in their incomes, and to the distribution of income among the impoverished population. Given that indices used to calculate poverty in Puerto Rico do not satisfy all three of these essential properties, other measures were proposed, their "values" made explicit and estimates were re-calculated. The use of these measures provided for some very interesting points.

The first and perhaps most important of these results was that poverty, as measured by all new indices based on absolute poverty lines, decreased during both decades in question. Most important, however, was not the fact that the decline in poverty documented by official statistics was corroborated through the use of a variety of other

indices, but that the estimated fall was up to 4 times as large as previously believed for the decade of the 70s and up to 5 times as great for the decade of the 80s. As these new indices were shown to be better estimators of the condition of poverty, the new figures do not represent alternative but rather "superior" estimates of the changes in poverty that took place in Puerto Rico during the 1970s and 1980s.

Using the "superior" indices, poverty as well as changes in poverty through time were decomposed by a variety of socioeconomic characteristics. From the exercise three main results were extracted. The first of these was the most unexpected finding whereby- despite low prevailing wages- poverty in the Island was found to be more a matter of lack of work than low wage levels. That is, when poverty is decomposed, some 3/4 of the total can be attributed to very high poverty rates among a large population consisting of households with non-working householders. In addition, in terms of actual numbers, households with working heads make up a minor and decreasing proportion of the total impoverished population. Implications of such a finding are important as better results would be expected from poverty alleviation policies that give preference to the creation of employment over the manipulation of wage levels through minimum wage legislation. This is not to say, however, that a first best solution could consist of a strategy meant to foment the creation of jobs through a serious effort at self-management.

The second main finding was that during the decade of the 70s poverty was most alleviated among society's most disadvantaged populations. Those with lowest levels of education, the elderly, women and the economically inactive saw their condition markedly improved. In contrast, males, those with higher levels of education, and the economically active saw their positions slightly or markedly worsened. The phenomenon was attributed to an economic crisis that afflicted the Puerto Rican economy during the 70s and the manner in which it touched various socio-economic groups. It was seen that while the dismal employment situation affected almost all groups, those qualifying for a deluge of

expanded transfer payments precipitated by the crisis saw their income falls partially, completely, or over-offset by the new sources of income. In contrast, those not qualifying saw their positions fall largely or completely undeterred. This and additional evidence prompted the conclusion that poverty in Puerto Rico did not decrease during the 1970s due to economic growth or any other factors endogenous to the local economy, but rather due to an explosion in transfer payments from the Federal Treasury. Thus, evidence was provided on the strong relationship between poverty, economic growth (or lack of it) and the liberalization of transfer payments.

The third main finding was that the economic expansion of the middle and late 1980s did not have a positive impact on poverty. The apparent incongruity was solved through an investigation of the manner in which the expansion touched the variety of socio-economic groups. Results of the analysis illustrated the restrictive or concentrated nature of the expansion. That is, the sharp rise in growth and employment came not in the form of an expansion of economic opportunities to economically inactive households, but in the form of an incorporation of second and third income earners into the labor force. The end result was that while the working household population did experience a decline in poverty, the sharp reduction in poverty that would have resulted from an expansion of job opportunities to previously inactive households did not occur. Instead, though to a lesser extent than in the previous decade, the drop in poverty experienced in Puerto Rico during the decade of the 1980s came about as a result of an expansion of transfer payments from the Federal Treasury to the non-working household population.

Lastly, an attempt was made at establishing the direction of poverty changes during both decades, independent of the poverty index used for measuring these, and of the particular level at which the poverty line was set. Application of a methodology suggested by Atkinson allowed for a most important conclusion. Regardless of where the poverty line is set, poverty, as measured by just about all "improved" indices of poverty, decreased

in Puerto Rico during the decade of the 1970s as well as during that of the 1980s.

The analysis of the distribution of income in Puerto Rico during the years 1970, 1980, 1990 found incomes to be highly unequally distributed. Taking a three decade average of the shares of the bottom and top income quintiles, the bottom group was found to receive a share of income equivalent to 1.78% of all income while the top group received an impressive 54.9%. As to the nature of such an unequal state of affairs, a decomposition analysis performed with the use of the MLD and a similar measure found that some two-thirds of the total inequality evident in the Island could be attributed to a combination of factors: a high degree of income inequality among a very large population consisting of households with either non-working householders or no working members at all. Not only inequality levels among these groups were found to be 2 to 3 times those of any working groups, but the group with non-working householders made up half or more than half of the total household population!

As to the trends in inequality, through the use of Lorenz curves it was established that an unambiguous decrease in inequality took place during the decade of the 1970s. This decline seemed initially very surprising given the fact that the decade of the 70s was one of very adverse economic conditions: stagnant to negative employment growth, and soaring unemployment rates approaching the 20% figure. An analysis of the source of the decline found that while a population shift into the inactive or unemployed categories had a negative impact on inequality, the trend was overwhelmed by an even sharper decline in inequality among households with economically inactive householders-particularly the older ones. The source of the decline in inequality was traced to a steep rise in the amount of transfer payments from the Federal government, primarily Social Security and food stamp payments.

As judged by the indices used to track the general trends in inequality, the equalizing trends continued into the decade of the 1980s. However, the use of Lorenz curve rankings established that no

unambiguous decline occurred during the decade of the 1980s. The fact that the Lorenz curve for 1990 does not lie completely above that for 1980 entails that an index contradicting the downward trend can always be found. Again, this result was very surprising given the fact that the decade of the 1980s was characterized by very favorable macroeconomic conditions: GNP and employment growing at rates far above population or labor force growth, and unemployment declining to rates not seen in two decades. Inequality, in the author's opinion, should have decreased unambiguously. Yet, the poorest members of society did benefit. The share of income going to the lowest quintile increased and the improvement did not go unnoticed by the MLD measure, whose special sensitivity to the incomes of those at the bottom of the distribution placed inequality at a sharper decline than any of the other measures.

As to the source of the decline, a strong drop in inequality levels among the household population with non-working householders or no working members at all was at the center of the decline. An increase in unearned income sources, particularly transfer payments from the Federal government, was found to be the specific source of the decline. The increase in the number of job opportunities did not lead to a significant decline in inequality as it did not translate into the incorporation of previously inactive households into the working population, but to the incorporation of second and third income earners into the labor force.

As to the potential of self-management as a solution to the problems of poverty and inequality in Puerto Rico, it was found that the impact of self-managed firms on macroeconomic employment levels was very small. However, on more local terms, at least two of the three firms did achieve their established goals: the creation of a good number of employment opportunities for those lacking them. Against quite difficult odds, firms prospered and performed rather well. Is there then a future for self-management in Puerto Rico? Certainly, the desperate circumstances in which many communities find themselves is a considerable driving force; the democratic alternative a natural extension of political process by which individuals join strengths to solve problems afflicting their communities. However, as seen through the experience of the firms, if these enterprises are to survive, a number of critical conditions must come together: (i) adequate financing, (ii) effective marketing of a strong product, and (iii) good command of day-to-day business operations. Precisely because these conditions seem to converge only in extraordinary circumstances, it is critically important to foment the creation of institutions capable of increasing enterprises' chances of survival through the provision of capital when merited, marketing, and operations assistance; not just when the firm finds itself in trouble, but right from the inception of the business idea. Without a strong and effective organization of this sort it is unlikely that a labor managed sector will ever flourish in Puerto Rico; its growth an effective tool against the problems of poverty and inequality in the Island.

**Professor of Economics, University of Puerto Rico, Mayagüez Campus. The author has written a book that includes a discussion of issues in the measurement of poverty and inequality as well as a more in-depth discussion of the diagnostics expounded in this summary. The book is titled "Poverty and Income Inequality in Puerto Rico, 1970-1990," Center for Social Research, Río Piedras, Forthcoming. See also, his Ph.D. dissertation, Cornell University*

Los costos sociales de los programas de ajuste estructural de Fondo Monetario Internacional: El caso de México

Edgardo Rodríguez*

El tema de este estudio es investigar el efecto de los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) en las variables que describen la situación de la población de México, incluyendo indicadores de niveles de vida, salarios, desempleo, gasto social (educación y salud), pobreza, entre otros. La razón por la cual se seleccionó a México para la investigación es la antigua relación que ha tenido dicho país con el FMI. México ha estado sujeto a programas de ajuste estructural desde el 1976, sin embargo, para propósitos de esta investigación, el análisis se hizo desde el 1983, año en que comenzó el primer programa de ajuste post-crisis de la deuda, hasta el 1992.

Durante el 1981 y 1982, México se vio afectado por una crisis financiera sin precedente. Una década de medidas populistas, en la cual el gasto público era el motor de la economía, el petróleo era el principal producto para la exportación (75% de las exportaciones totales), y el abuso de la deuda pública como medio para financiar dicho gasto fue casi irracional,¹ provocó que México se hiciera muy vulnerable a la volatilidad de los agentes externos. Las drásticas reducciones en el precio del petróleo e incrementos significativos en las tasas de interés internacionales durante estos años, causaron una fuga de capitales de tal magnitud, que llevó a los mercados financieros a una peligrosa crisis. La presión sobre el peso mexicano era demasiado grande, el sector externo y público estaban inmersos en grandes déficit, la tasa de inflación estaba creciendo rápidamente y la deuda externa era incontrolable. Estos problemas llevaron a México a tomar una serie de rigurosas medidas, como por ejemplo, retirar el peso del mercado de cambios al mismo tiempo que se devaluaba la moneda. Posteriormente, el Secretario de Finanzas hizo una petición a los acreedores de una moratoria de tres meses para el pago del principal de su deuda y un mes después se privatizó la banca.

Ninguna de las medidas que implantó el gobierno mexicano para aliviar la crisis tuvo el efecto

esperado debido principalmente a la inconsistencia del estado al llevarlas a cabo. La situación económica de México en 1982 era tan deprimente, que llevó al gobierno a suscribir una carta de intención al Fondo Monetario Internacional el 20 de noviembre de ese año. El acuerdo otorgaba un crédito de facilidad ampliada, en principio por 4,100 millones de dólares girables en los siguientes tres años, condicionado a que México siguiera un programa económico de ajuste estructural. Con esto comenzó una década de crisis y cambios en la economía mexicana.

El primer programa se llamó el Programa Inmediato de Reordenamiento Económico (PIRE). El mismo estaba programado para tres años y se dividió en dos fases. La primera fase consistió en un conjunto de medidas económicas de "shock" caracterizada por una marcada austeridad inherente en los programas ortodoxos. La restricción monetaria y del sector público, el control salarial y una fuerte política devaluatoria fueron las medidas incluidas en el programa. Los resultados fueron positivos en casi todas las áreas. El déficit del sector público se redujo bastante debido a una fuerte reducción del gasto y al incremento de los ingresos de dicho sector. En términos del sector externo, la contracción de la demanda agregada provocada por el conjunto de medidas económicas (en especial la devaluación del peso) causó que las importaciones se contrajeran y que la cuenta corriente de la balanza de pagos mejorara significativamente. La economía se contrajo en -4.2% y la tasa de inflación se elevó a 101.5%.

La segunda fase del programa se caracterizó por el relajamiento de las medidas aplicadas en el año 1983. Desde el 1984 en adelante, las medidas restrictivas eran menos rigurosas ya que las metas económicas que había impuesto el FMI para el primer año del programa, se habían alcanzado con la única excepción del problema de la tasa de inflación. La devaluación del peso durante el 1983 había alimentado las presiones inflacionarias considerablemente. Para eliminar ese problema, el gobierno de Miguel de la Madrid (presidente de México durante el periodo 1982-1988), implantó una nueva medida dirigida a contener la inflación que consistió en reducir las expectativas inflacionarias mediante la indexación de los precios claves de la economía a la inflación esperada. Así, la tasa de inflación por fin se pudo reducir, bajando ésta a 65.5% en el 1984 y a 57.7%

en el 1985. Sin embargo, para el 1985, las metas que se habían propuesto tanto el gobierno de México como el FMI no se habían alcanzado. El déficit del sector público se estancó en el 1984 y comenzó a subir en el 1985 debido a que el gasto en el pago de los intereses de la deuda era muy grande y al relajamiento desmedido de las otras medidas. Además, el precio del petróleo estaba bajando rápidamente, lo que minó los ingresos del sector público.

El sector externo también se deterioró a causa de una reducción en los términos de intercambio, y, principalmente, a una falta de financiamiento externo. La balanza comercial al igual que la cuenta corriente de la balanza de pagos sufrieron reducciones marcadas. Por ende, las reservas internacionales se redujeron significativamente. Esto provocó que el FMI le suspendiera los desembolsos del préstamo a México a mediados del 1985.

Para el 1986, el gobierno había preparado un nuevo programa económico considerando que el FMI ya no estaba a su lado. Sin embargo, una variable externa complicó la situación. A principio de año el precio del petróleo se redujo drásticamente en un 50% lo que hizo ver a México que la dependencia del petróleo tenía que reducirse,² ya que a consecuencia de esto las exportaciones de mercancías al igual que los ingresos del sector público estaban sufriendo un marcado descenso. Esto provocó que tanto el gobierno como el programa económico cambiaran sus expectativas. El 22 de julio México suscribe otra carta de intención al FMI donde se expuso el nuevo programa de medidas económicas que constituían el "Programa de Aliento y Crecimiento" (PAC). Este programa tenía los mismos elementos que el anterior en cuanto a política económica pero el período era de 18 meses. La austeridad era bien estricta tanto en términos de la política monetaria como en los gastos del sector público, sólo que esta vez las políticas estaban dirigidas a minimizar el efecto negativo que causaría el descenso del precio del petróleo. Debido a esto el peso fue devaluado en 60%. Las tasas de interés se mantuvieron altas para ofrecer rendimientos reales positivos a toda costa. Tanto la restricción del gasto público, como los aumentos en los precios de bienes y servicios provistos por dicho sector fueron considerablemente grandes. Como se puede apreciar, la principal meta de los programas ortodoxos del FMI es reducir la demanda agregada, porque solo así, según esta

agencia, se pueden resolver los desequilibrios económicos. Sin embargo, fue en términos de la reestructuración de la deuda externa que este programa se diferenció del anterior. El Club de París, el Banco Mundial, y la banca comercial extranjera negociaron importantes convenios con México y aportaron un nuevo conjunto de medidas de financiamiento.

También durante ese año México firmó la entrada al GATT y con esto una nueva política comercial donde el sector externo se hacía más abierto a la competencia y las inversiones extranjeras. El sector público hizo una de sus peores demostraciones pues su déficit creció a un nivel nunca antes visto (15.9% del PIB) debido al aumento en el pago de deuda pública interna producto de los incrementos en las tasas de interés internas. En términos de ingresos públicos, aunque los ingresos provenientes del petróleo bajaron, los incrementos en los precios de bienes y servicios públicos y los ingresos provenientes de la mayor desgravación de las importaciones no permitieron que los ingresos públicos se redujeran marcadamente.

En cuanto al sector externo, la baja en el precio del petróleo y las medidas para contraer la demanda, causaron que la balanza en cuenta corriente se redujera bastante. En general, la economía sufrió una recesión pues el PIB real se redujo en 3.8%. Sin embargo, el problema más importante en ese momento era la elevada tasa de inflación. En 1987 esto se hizo más evidente cuando los efectos inflacionarios de la devaluación hicieron estragos en la economía mexicana. Esto, combinado con una inmensa fuga de dólares y un "crash" financiero en octubre, produjo una crisis de altas proporciones. La tasa de inflación fue de 131.8% anual, lo que preocupó al estado dado lo cerca que estaba México a una hiperinflación. Este fue el fin del PAC y el inicio de un modo de pensar distinto. Las fuerzas se tenían que dirigir hacia erradicar este terrible mal social.

Por esto, en diciembre de 1987 el gobierno de De la Madrid creó el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), un programa de ajuste estructural heterodoxo, en el cual los diferentes sectores de la sociedad acordaban las políticas económicas a implantarse. Estos sectores establecían el nivel de los precios claves (tasa de interés, salario mínimo, precios de bienes y servicios provistos por el sector público) y posteriormente, acordaban por cuánto tiempo se mantendrían fijos dichas variables

utilizando como precio-referencia la tasa de cambio. El programa contenía una parte ortodoxa donde la reducción del déficit público era una parte fundamental. También se trató de contener la demanda agregada mediante la restricción monetaria. La economía mexicana tuvo un gran desempeño durante ese año en que la tasa de inflación se redujo y el PIB real creció 1.2% gracias a una creciente inversión privada. El sector público tuvo un desempeño notable en cuanto a reducir su déficit. La liberalización comercial mejoró el acceso a otros mercados y redujo las presiones inflacionarias.

En el 1989 llegó un nuevo presidente, Carlos Salinas de Gortari, que trajo otro programa de ajuste estructural semejante al PSE que aseguró una continuidad en las políticas económicas que tuvieron éxito bajo el último año de presidencia de Miguel de la Madrid. Los sectores continuaron reuniéndose periódicamente para delinear políticas económicas. Desde el 1989 hasta el 1992 el PIB real creció a un promedio anual de 3.4% y la tasa de inflación se redujo de 114.1% en 1988 a 26.6% en 1990 y a 15.5% en 1992.

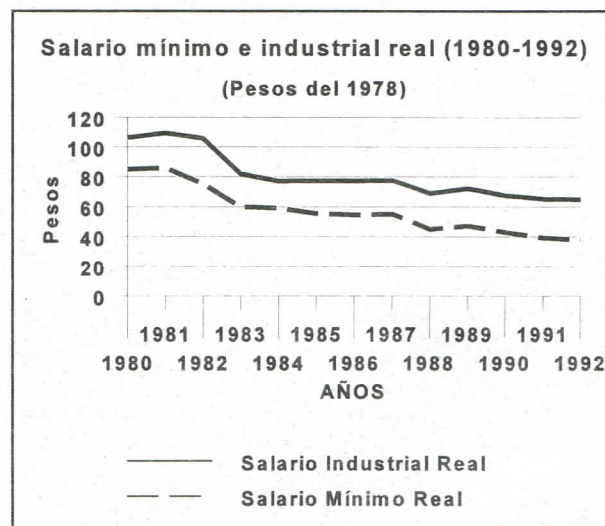
No hay duda de que un programa económico basado en la reducción de la demanda agregada mediante una restricción monetaria y de crédito, una restricción del sector público, el control salarial y políticas devaluatorias conlleva grandes sacrificios para la sociedad en general. Sin embargo, fue la clase asalariada mexicana quien más sufrió los impactos de los programas de ajuste. Esto fue así debido a que el costo social más importante que produjeron estos programas fue la reducción en los salarios reales. Como se observa en la Gráfica 1, durante este período el salario mínimo real estuvo en picada. La participación de los asalariados en el PIB se reducía a la vez que se implantaban los ajustes. Los salarios industriales experimentaron una reducción en términos reales similar a la del salario mínimo real, de lo que se concluye que es el salario mínimo el que sienta la pauta para los aumentos en los salarios de sectores específicos. Definitivamente, la baja en los salarios reales fue el instrumento que utilizó tanto el sector público como el sector privado para contrarrestar los efectos relacionados a los ajustes estructurales.

Además, es importante tener presente que tanto el compromiso del gobierno de no despedir a ningún trabajador a causa del alto costo que esto implica en México debido al Código Laboral y la fuerza de los

sindicatos públicos, abrió las puertas a la contracción de los salarios. Esta fue una de las razones por la cual la tasa de desempleo abierto no aumentó significativamente como se esperaría en estos casos. En general, la reducción del consumo privado y de la demanda agregada producto de la contracción del crédito y el gasto público, producen regularmente una política de reducir costos que incide en la tasa de desempleo.³ Otro factor importante en el comportamiento de la tasa de desempleo reside en el crecimiento del sector informal. La carencia de oportunidades de empleo en el sector formal y la falta de un seguro por desempleo y otros programas de seguridad social, contribuyeron a este tipo de comportamiento en el sector informal.

En relación al gasto social del sector público, se evidenció una primera fase de descenso durante los programas ortodoxos y posteriormente una de ascenso al implantarse los programas heterodoxos. Durante los programas ortodoxos, el gasto social (salud y educación componen el 85% de la puesta en marcha del gasto social) se redujo drásticamente, especialmente, en el primer año del ajuste. Gran parte de la reducción del

Gráfica 1



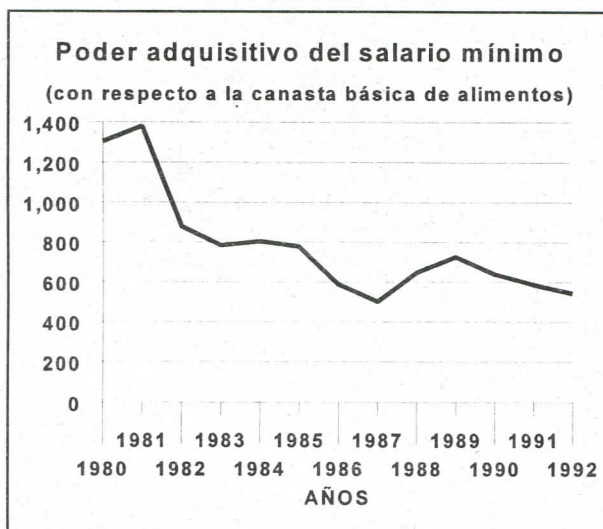
gasto público que se evidenció como parte de los programas de estabilización fue hecha en el gasto programable (más específicamente en el gasto social), con el propósito de reducir el déficit del sector público y de dedicar más recursos hacia el pago de intereses sobre la deuda externa. La segunda fase comenzó en el 1988 con el inicio del programa heterodoxo y el mejoramiento

de las finanzas del sector público (la privatización de empresas paraestatales del sector público jugó un papel fundamental), lo que implicó que más recursos podían ser dirigidos al gasto social. El gasto social se incrementó incluyendo salud y educación, como parte de un programa contra la pobreza rural y urbana creado por el gobierno de Salinas de Gortari conocido como el Programa Nacional de Solidaridad. No hay lugar a dudas, de que el proceso de privatización implantado durante la década de los ochenta y principios de los noventa fue lo que, en primera instancia, eliminó el déficit del sector público, aunque los aumentos de los precios de bienes y servicios provistos por el sector público al igual que la reforma tributaria del 1987 ayudaron también.

Otra conclusión importante es que la política de eliminación de subsidios al igual que los aumentos en los precios de los bienes y servicios provistos por el estado, contribuyeron al encarecimiento significativo de estos últimos. Esta política contribuyó al deterioro en el poder adquisitivo del salario mínimo en relación a la canasta básica de alimentos durante todo el periodo, inclusive en los años que la tasa de inflación se reducía significativamente (Gráfica 2).

La reducción en el gasto social causó que los recursos físicos y humanos en el área de la salud que provee el estado se deterioraran. La cantidad de recursos de salud (camas, unidades médicas y doctores) para las personas aseguradas en el Instituto Mexicano de Seguro

Gráfica 2



Social, al igual que para las personas que reciben servicios del Instituto de Salud y Seguridad Social de Trabajadores del Estado, se redujo durante toda la década de los ochenta. Posteriormente, hubo una mejoría en 1991 y 1992, gracias, en gran medida, al mejoramiento de las finanzas de sector público.

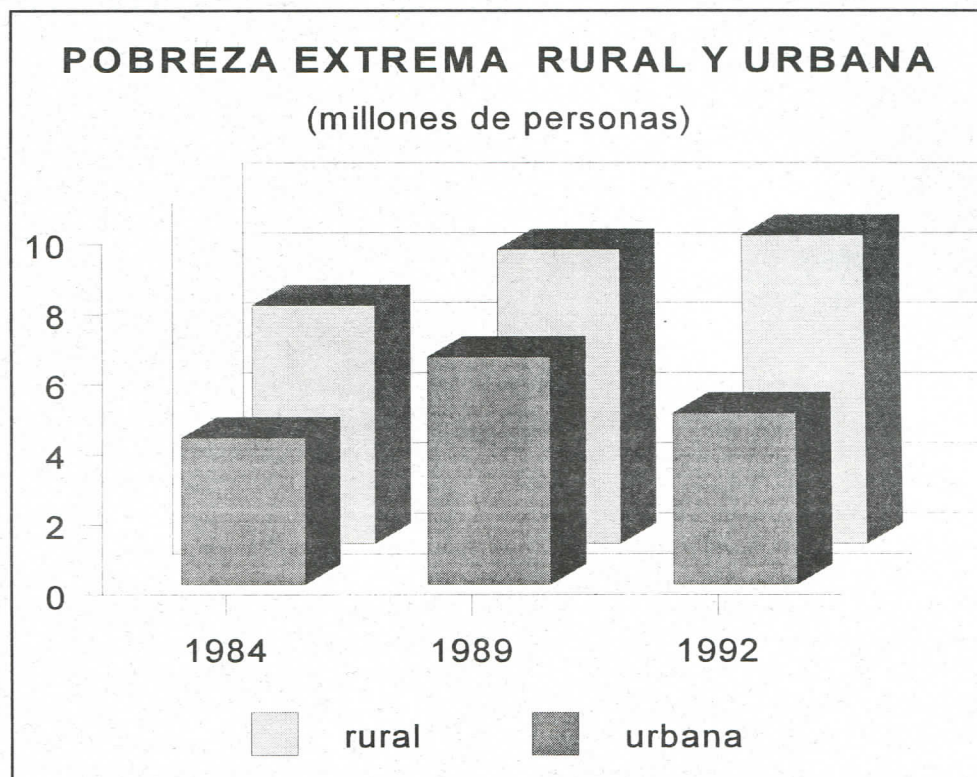
De un examen de los indicadores de niveles de vida se desprende que el impacto de la crisis no fue tan severo en éstos. La tasa de deserción escolar no varió significativamente, aunque a nivel de escuela superior ésta se mantuvo alta y nunca volvió a los niveles previos a la crisis. Se concluye que la necesidad de los jóvenes de ingresar a la clase trabajadora se mantuvo durante todo el período de ajuste. La tasa de mortalidad infantil continuó su tendencia descendente. Sin embargo, más muertes infantiles y pre-escolares fueron causadas por deficiencias nutricionales, concluyendo que el encarecimiento de productos básicos y, por consiguiente, la baja en el poder adquisitivo de las personas, pudo traer un deterioro de las condiciones nutricionales de la población más pobre.

El estudio concluye que sobre la clase media recayó la mayoría de los costos del programa de gastos del FMI. La clase media depende de los salarios como principal fuente de ingreso, así que no podían proteger sus ingresos de los cambios producidos por las políticas implantadas (devaluación del tipo de cambio, aumento de tasas de interés, restricción crediticia, etc.). Estas políticas conducen a una distribución del ingreso más desigual. Además, es la clase media el sector de la población que más utiliza los servicios que provee el gobierno, por lo que fue la clase más afectada por las restricciones presupuestarias del sector público.

Por otro lado, aunque durante la década de los ochenta la pobreza extrema se incrementó tanto en el sector urbano como en el rural, el crecimiento económico experimentado durante el sexenio de Salinas de Gortari y el programa contra la pobreza implantado por el gobierno de este, redujeron la pobreza extrema pero solamente en el sector urbano. La pobreza extrema en el sector rural continuó ascendiendo. (Gráfica 3)

**Profesor de economía, Universidad Católica de Ponce. Resumen de su tesis de maestría del Programa Graduado de Economía, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.*

Gráfica 3



Notas

1. Para el 1982, la deuda pública externa era de 58,146 millones de dólares (29.8% del PIB) y la deuda externa total era de 84,145 millones de dólares (43.1% del PIB).
2. Para el 1985, las exportaciones de petróleo y sus derivados eran el 60.9% de las exportaciones totales.
3. Durante los años en que la economía mexicana estuvo sujeta a los programas de ajustes, la tasa de desempleo más alta que se evidenció fue de 5.7% en 1984. La tasa de desempleo abierto en la proporción de la población económicamente activa que no está empleada. Se califica como empleada a aquella persona que por lo menos labora una hora a la semana.

Tesis de maestría desde 1990 a 1996
Escuela Graduada de Economía
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

Gustavo Vélez*

1990 - 91

Allende Rosa, Dalila. *Capacidad política y el declive de la fecundidad en Puerto Rico*

Baquerizo Barriga, Armando Andrés. *Mecanismo de reducción de deuda externa*

Díaz Zumaeta, Wilfredo. *Las ponderaciones como metodo de priorización de la inversión pública en Perú*

García Pelati, Luis. *La elitización en el Viejo San Juan*

Garrido Moreno, José Antonio. *La Comunidad Económica Europea*

Gómez Carrillo, Arsenio. *La demanda de la carne de cerdo fresca producida en Puerto Rico*

González Nieves, Mary. *Lucro cesante: análisis de la metodología vigente para el cómputo de la compensación*

Muller Vázquez, Ismael. *La agricultura en Puerto Rico: problemas, posibilidades y recomendaciones*

Nieves Mournier, Emil. *Análisis crítico de los procesos de Prueba Hecksher-Ohlin: un enfoque epistemológico*

Quiñones Domínguez, Martha G. *Las leyes de cabotaje: un análisis de cómo afecta los precios de algunos productos alimenticios*

Rivera Bruno, Amparo. *La demanda por créditos en las universidades privadas: el caso específico de la Universidad Metropolitana*

Rodríguez de Díaz, María Guadalupe. *La teoría de la dependencia y el proceso de desarrollo de Puerto Rico: una reformulación de la teoría de desarrollo esbozada por la Cepal*

1991 - 92

Díaz Caballero, Iris Socorro. *La contribución económica de la Iglesia Pentecostal en la economía de Puerto Rico: una primera aproximación*

Lugo Camacho, Fernando L. *Proyección de recaudos al Fondo General por concepto del total de arbitrios: una aplicación de la técnica de vectores autoregresivos*

Ríos Rivera, Edwin. *Un análisis cuantitativo de las exportaciones manufactureras de Puerto Rico y su vinculación con la economía de Estados Unidos*

1992 - 93

Benítez Hernández, Luis. *Análisis de las disposiciones de la Ley de Reforma Educativa en lo referente al proceso presupuestario*

Mata Rodríguez, Angel. *Determinaciones de quiebras personales y el Código de Reforma de Quiebras del 1978: un análisis de las peticiones radicadas en Puerto Rico*

Pérez Figueroa, Gamaliel. *Una proyección de la demanda de educación universitaria en Puerto Rico: un enfoque econométrico*

Rodríguez González, Norma Iris. *La función de consumo de bienes no duraderos y de servicios en Puerto Rico*

Rodríguez Santos, Juan Manuel. *La importancia del factor empresarial en la economía: un análisis de los empresarios locales del sector manufacturero de Puerto Rico*

Sosa, Carmelo. *Análisis financiero entre las corporaciones públicas de Puerto Rico comparadas con algunos estados de los Estados Unidos*

Vega Bernuy, Irene. *Evolución de la inversión pública en el período de 1980-1990 y su incidencia en la economía peruana*

1993 - 94

Acevedo Ilarraza, Carlos Alberto. *Visión panorámica de la contaminación en Puerto Rico: un análisis teórico y crítico basado en la estrategia económica imperante*

Acevedo Márquez, Harold. *Impacto de las recesiones 1973-75 y 1981-83 en la estructura industrial de Puerto Rico: un enfoque insumo producto*

Acosta Lebrón, Jorge L. *Integración económica internacional: el caso del Mercado Común Centroamericano*

Andújar Scheker, Julio G. *La reforma tributaria de 1992 en la República Dominicana: un análisis crítico*

Dávila Molina, Jesús. *Un análisis cuantitativo del mercado de leche fresca en Puerto Rico*

Jiménez Tirado, Carlos. *El déficit fiscal y las tasas de interés*

Laboy Bruno, Jorge L. *La relación dinero - actividad económica en Puerto Rico: una aplicación de la causalidad Granger y de la prueba de Barro*

Rivera Rodríguez, José Ernesto. *La estimación de los multiplicadores de empleo e ingreso Tipo III derivados del modelo de insumo - producto utilizando ecuaciones econométricas de consumo por sector*

Vilagarn Bach- Esteve, Montserrat. *Función de demanda de cigarrillos en Puerto Rico*

1994 - 95

Colón Parrilla, Sonia I. *La unión económica y monetaria Europea: una evaluación de los países miembros para el establecimiento de la moneda única*

Cortés, Mildred. *Estimados de la elasticidad de la oferta para el cultivo de guineo*

1995 - 96

Martínez Cotto, Wanda M. *Un modelo econométrico para estimar la inversión privada en construcción en Puerto Rico*

Marrero Rivera, José R. *La fusión del Banco Popular y el Banco de Ponce: un análisis del modelo de cotización de activos de capital*

Rodríguez, Carlos. *Efecto de la sorpresa monetaria en la tasa de interés, tipo de cambio, y tasa de inflación en la República Dominicana*

Rodríguez, Luis Rafael. *Propuesta de transformación de algunas facilidades de la Villa Olímpica del 2004 en facilidades turísticas*

Rodríguez Ríos, Edgar. *Los costos sociales de los programas de ajuste estructural del FMI: El caso de México*

1996 - 97

Crespo, Gregory Néstor. *La privatización como alternativa estratégica para el desarrollo de la infraestructura en Puerto Rico*

Jirau Vázquez, Geraldo A. *El Tratado de Libre Comercio de América del Norte: un análisis crítico del tratamiento dado al capital y a la mano de obra*

Melecio, Silvia. *El desarrollo de la industria de capital de alto riesgo en Puerto Rico*

Muñiz Arce, Edwin. *La Fisiocracia desde el debate la ideología del saber-poder*

Pérez Hernández, Elvia. *Fondos de estabilización de ingresos fiscales*

Urbina Cruz, Juan. *El desarrollo económico y la distribución del ingreso en Puerto Rico*

* Asistente de Investigación, Unidad de Investigaciones Económicas, Universidad de Puerto Rico

Vol. I, Núm. 1	julio-septiembre 1995
Economía de Puerto Rico: Comportamiento de diversas variables macro-económicas de Puerto Rico y de la trayectoria de crecimiento entre Puerto Rico y Estados Unidos durante 1950-94	<i>Jaime Bofill</i>
Economía de Estados Unidos: Los Estados Unidos ante la reestructuración del comercio internacional y los retos de la educación	<i>Jaime Bofill</i>
Temas especiales: La gestación de la crisis mexicana	<i>Juan Lara</i>
Temas de investigación: Un análisis económico del sector de alta tecnología de la economía de PR	<i>Leandro Colón</i>
Progreso Tecnológico y Productividad en Puerto Rico: 1963 y 1977	<i>Jaime del Valle</i>

Vol. I, Núm. 2	octubre-diciembre 1995
Economía y sociedad: Del crecimiento económico al bienestar integral	<i>Jaime Bofill</i>
Economía y educación: Relaciones entre la empleabilidad de los egresados de la Universidad de Puerto Rico y el currículo de estudios: Hallazgos principales	<i>Julio Quintana</i>
Nota metodológica: El producto interno bruto real de Estados Unidos computado mediante el método de ponderación encadenada	<i>Antonio Pérez</i>
Temas de investigación: Teorías Evolucionistas y Cambio Tecnológico: Una Revisión	<i>Jaime del Valle</i>
Growth, Technology and International Trade	<i>Luis A. Rivera Batiz</i>

Vol. I, Núm. 3	enero-marzo 1996
Nota de los editores	<i>Jaime Bofill y Jaime del Valle</i>
The Economic Outlook in the OECS: Trade, Business and Investment Prospects	<i>David Lewis</i>
Problemas estructurales en la economía Dominicana	<i>Juan Lara</i>
¿Inicio de la recuperación de la economía Cubana?	<i>Gerardo González</i>
La economía cubana en transición	<i>Fernando Zalacaín</i>
Export Processing Zones in the Dominican Republic	<i>Dale Mathews</i>
Efecto de la sorpresa monetaria en la tasa de interés, tipo de cambio y tasa de inflación en la Republica Dominicana	<i>Carlos Rodríguez</i>

Vol. I, Núm. 4	abril - junio 1996
La Sección 936	<i>Jaime Bofill Valdés</i>
Trayectoria de la Sección 936 desde 1976 a 1996	<i>Jaime Bofill Valdés</i>
The Economic Impact of Firms Operating Under Section 936: Some Controversial Issues	<i>Angel L. Ruíz Mercado</i>
Algunos impactos económicos de la eliminación de la Sección 936	<i>Fernando Zalacaín</i>
Los fondos 936 en el sistema financiero	<i>Juan Lara</i>
De la Sección 936 al pluralismo institucional	<i>Francisco A. Catalá Oliveras</i>
Sobre "La 901"	<i>Erick Negrón Rivera</i>
¿Existe vida después de la Sección 936?	<i>Ramón J. Cao García</i>
Bibliografía	<i>Brenda Caparrós y Gustavo Vélez</i>

PRÓXIMO BOLETÍN DE ECONOMÍA

Vol. II, Núm. 2

octubre-diciembre 1996

Temas de investigación socioeconómica: segunda parte	<i>Jaime Bofill</i>
An Analysis of the Transmission of Real and Monetary Shocks on the Economy of Puerto Rico from the United States	<i>José I. Alameda Lozada</i>
Fondos de estabilización de ingresos fiscales	<i>Elvia Pérez Hernández</i>
Propuesta de transformación de algunas facilidades de la Villa Olímpica en facilidades turísticas	<i>Luis Rafael Rodríguez</i>
Estimation of Drug Addition Parameters in a Freshman Population	<i>Julio C. Quintana Díaz</i>
Resumen de las tesis de maestría en economía para los años 1995 y 1996, Escuela Graduada de Economía, Universidad de Puerto Rico	<i>Gustavo Vélez</i>

El Boletín de Economía es una publicación trimestral de la Unidad de Investigaciones del Departamento de Economía, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Los artículos son responsabilidad del autor por lo que no necesariamente representan las opiniones o posiciones de la Unidad de Investigaciones.

Unidad de Investigaciones Económicas
Departamento de Economía
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Apartado 23345
San Juan, Puerto Rico 00931-3345
Tel (787) 764-0000 Ext. 2451/ 2458
Fax (787) 763-5599
economia@rrpac.upr.clu.edu

Junta Editora

Jaime Bofill Valdés

Jaime del Valle Caballero

Colaboradores

Olben Delgado

Gerardo González

Edgardo Rodríguez

Orlando J. Sotomayor

Diseño Gráfico y Base de Datos

Brenda Caparrós

Fernando Medina Ortiz

Gustavo Vélez